



REPUBLICA DE COLOMBIA
Rama Judicial

Auto interlocutorio	322
Radicado	052663103001-2020-00116-00
Proceso	Ejecutivo para la efectividad de la Garantía Real
Demandante	Diana Cristina Bolívar Acosta
Demandada	Valentina Quintero Rivera
Asunto	Inadmite demanda

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE
ENVIGADO

Veintiuno de Julio de dos mil Veinte

Sobre la anterior demanda con pretensión de ejecución de Diana Cristina Bolivar Acosta contra Valentina Quintero Rivera, se tiene lo siguiente:

CONSIDERACIONES:

1. El Decreto Extraordinario 806 del 2020 –que fue expedido, entre otros eventos, para *“flexibilizar la atención de los usuarios del servicio de justicia”*; *“para que los procesos no se vean interrumpidos por las medidas de aislamiento y garantizar el derecho a la salud de los usuarios de la justicia y de los servidores judiciales”*, implementó el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el proceso jurisdiccional-, para lo cual estableció que se debe evitar *“exigir y cumplir formalidades presenciales o similares”* (art. 2º), por lo que dispuso, entre otras cosas, que la demanda y sus anexos, se puedan presentar en forma de mensaje de datos (art. 6).

Es de resaltar, además, que en la parte considerativa del referido decreto, se estableció: *“Este marco normativo procurará que por regla general las actuaciones judiciales se tramiten a través de medios virtuales y excepcionalmente de manera presencial. Por lo que se debe entender que las disposiciones de este decreto complementan las normas vigentes, las*

cuales seguirán siendo aplicables a las actuaciones no reguladas en este decreto”.

2. El Código de Comercio, en el art. 619, define los títulos valores como aquellos “*documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora*”, concepto que pone de presente, “entre otras características, *su fuerza o función legitimadora, en virtud de la cual invisten o facultan al tenedor legítimo, es decir a quien lo posea conforme a su ley de circulación*” (art. 647 ejusdem), para que ejercite el derecho en ellos incorporado, inclusive, cuando de acuerdo con las reglas del derecho común, éste no sea el titular de los mismos, particularidad que apareja, por consiguiente, la renuncia de cualquier intento de indagación respecto de la propiedad del derecho”¹.

Según este estatuto, en los títulos valores el derecho se incorpora en el documento mismo², por lo cual, ante la falta de pago, el tenedor legítimo puede acudir “al procedimiento ejecutivo” (art. 793 del C. de Co.), obviamente debiendo aportar el documento original, pues es el único que lo legitima para demandar³.

Sobre la necesidad de la aportación del título valor original, así se ha pronunciado la jurisprudencia:

“En virtud del principio de la autonomía, el derecho literal que contiene el título valor, se confunde con el mismo documento. Darle la dicha calidad a un documento que es incuestionable, solamente una copia, conlleva el riesgo de que el derecho cartular sea ejercido dos veces. Es decir, puede duplicarse el derecho y constituirse dos obligaciones independientes, una en el documento original y otra en la copia del mismo. Solamente el documento original puede llevar inherente en él, el derecho literal que trata de ejercitarse, para que pueda predicarse que reúne las condiciones establecidas en el art. 619 del Código de Comercio”⁴.

Es que -como lo reconoce la jurisprudencia-, “los principios rectores de la literalidad, incorporación, autonomía y legitimación que informan el derecho cartular, confieren al tenedor de un título valor garantías indispensables en orden al afianzamiento de su circulación, reclamada por la expansión del comercio y al propio tiempo por la seguridad que debe gobernar la actividad cambiaria”⁵.

3. En esa medida, entonces, no obstante que las medidas adoptadas en el mencionado decreto presidencial, tendientes a “facilitar y agilizar el acceso a la justicia ... evitando exigir y cumplir formalidades presenciales”, permiten que la demanda y sus anexos se puedan presentar en forma electrónica, se tiene que, tratándose de demandas ejecutivas, donde el soporte de la ejecución sean títulos valores no electrónicos o desmaterializados, no resulta aplicable dicha norma, porque aceptarlo así, sería desconocer de tajo la normatividad comercial, la cual está permeada, como se anotó, de toda esa principalística que los inspira. La característica “principal de los títulos valores es que ellos están destinados a circular como sustitutos de lo que representan (dinero, mercaderías o posibilidad de participación en la gestión de una sociedad) en forma muy simple, sin las trabas de la cesión de créditos o de los contratos”⁶.

4. La exigencia no es caprichosa, ni debe mirarse como formalista al extremo de un “ritualismo exagerado”, ni que con ella se desconozca el principio de la buena fe de los sujetos procesales, sino que, por el contrario, está fundada en el imperio de la ley, en la prevalencia del derecho sustancial, en el respeto de las formas fundamentales que deben garantizar el debido proceso y el derecho de defensa.

5. El permitir la ejecución sin la aportación del título valor, además de desconocer toda la parte sustancial relativa a su naturaleza, afecta en grado sumo el derecho de defensa del demandado:

5.1 Al no tener acceso al original, la posibilidad de proponer una eventual tacha de falsedad, se disminuye enormemente, pues cuando se trata de falsedades materiales, por superposición, adición, supresión, borraduras, raspaduras, tachaduras, etc., es indispensable constatarlo en el documento original mismo, lo que no podría hacer, ya que el título no está a su disposición para ser visualizado y ni siquiera del juez, pese a que ya le está corriendo el término perentorio para proponer la tacha como excepción (art. 270 del C.G.P.), el que no puede interrumpirse –o por lo menos es problemático–, con la petición que eventualmente haga el ejecutado de que se requiera al demandante para que lo aporte.

5.2 El art. 116, num. 3º, del C.G. del P. establece que en *“todos los casos en que la obligación haya sido cumplida en su totalidad por el deudor, el documento contentivo de la obligación sólo podrá desglosarse a petición suya, a quien se entregará con constancia de cancelación”* ¿Cómo puede garantizar este derecho el juez, si no lo tiene en su poder?

5.3 Puede facilitar la ejecución simultánea con base en un mismo título valor, con los innumerables problemas que esto puede ocasionar, lo que no quiere decir que se esté presumiendo la mala fe del acreedor o de su apoderado judicial, sino que el documento puede extraviarse o ser robado y presentado posteriormente al cobro judicial, pese a que ya se esté adelantado una ejecución con base en una reproducción digital⁷.

6. Así las cosas, como el decreto en mención no es derogatorio de la legislación vigente, se declarará inadmisibile la demanda para que la parte demandante, en el término de cinco (5) días, allegue el título valor original soporte de la ejecución, lo cual puede hacer comunicándose por los canales dispuesto por este Despacho para la autorización, excepcional, de realizar un acto procesal de manera presencial.

7. Dará aplicación a lo previsto en el inciso 4º del artículo 6 del Decreto 806 del 2020, esto es, enviar por medio electrónico copia de la demanda y sus anexos a la demandada, así como el escrito de subsanación.

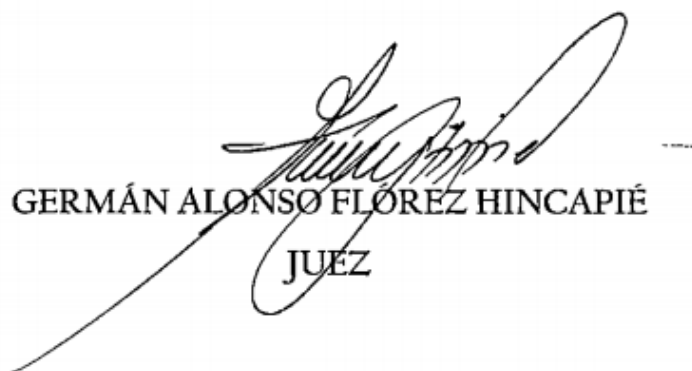
Por lo expuesto, el Juzgado

RESUELVE

PRIMERO: Declarar inadmisibile la demanda, para que dentro del término de cinco (5) días, se dé cumplimiento a los requisitos exigidos.

SEGUNDO: Para representar los intereses de la parte demandante, se reconoce personería al abogado Felipe Ramírez Posada (T.P. 190.990), conforme las facultades a él conferidas.

NOTIFÍQUESE



GERMÁN ALONSO FLÓREZ HINCAPIÉ
JUEZ

CERTIFICO

Que el auto anterior fue notificado en estado No. 75_, fijado hoy en la Secretaría del Juzgado a las 8 am

Envigado, Octubre 7 del 2020



Tatiana Corrales Ramírez
Secretaria

